

Renovar el progresismo

Daniel Schteingart*

* Doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Especialista en desarrollo económico sostenible, políticas industriales, mercado de trabajo, pobreza y desigualdad.

Introducción

El progresismo argentino atraviesa su crisis más profunda en lo que va del siglo XXI. El triunfo de Javier Milei –primero en las presidenciales de 2023 y luego en las legislativas de 2025– no fue casual: es la consecuencia de un malestar social extendido con una tradición que perdió encanto, credibilidad y capacidad de futuro. El progresismo, cuya fuerza principal en las últimas dos décadas ha sido el peronismo kirchnerista, no está logrando representar la esperanza de los sectores más postergados ni, mucho menos, enamorar a los sectores medios. Y, para peor, perdió el oído de las nuevas generaciones: los jóvenes hoy votan masivamente a los libertarios.

El panorama se agrava porque al interior del progresismo hay fuertes internas entre sus principales líderes –como Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof– y, por sobre todas las cosas, una gran dificultad para renovar ideas. En el debate político, esta problemática suele resumirse en una frase: “hay que componer nuevas canciones”. Pero esas canciones no llegan.

Escribo este texto desde una doble convicción. Primero, que el progresismo sigue siendo necesario. Los países con los contratos sociales más logrados –aquellos donde las personas se reportan más satisfechas con su vida, como los nórdicos– son precisamente los

que hicieron realidad buena parte del ideario progresista: prosperidad compartida, igualdad de oportunidades, cohesión social y ampliación de derechos. Pero también, que para volver a enamorar, el progresismo necesita una profunda renovación intelectual. No basta con resistir a Milei ni con apelar a la memoria emotiva de un pasado nostálgico –ya sea 1945, 1974 o 2015. Hay que repensar profundamente muchas cosas, en particular en materia económica y productiva, donde los errores de los últimos años fueron mayúsculos.

Este trabajo propone una serie de ideas para renovar el progresismo argentino, con foco en la agenda económica, productiva y de mirada sobre el Estado. No son recetas, sino un humilde llamado a discutir viejos dogmas, y repensar una política pública que permita cumplir –y sostener en el tiempo– la promesa de mejorar la calidad de vida de las mayorías.

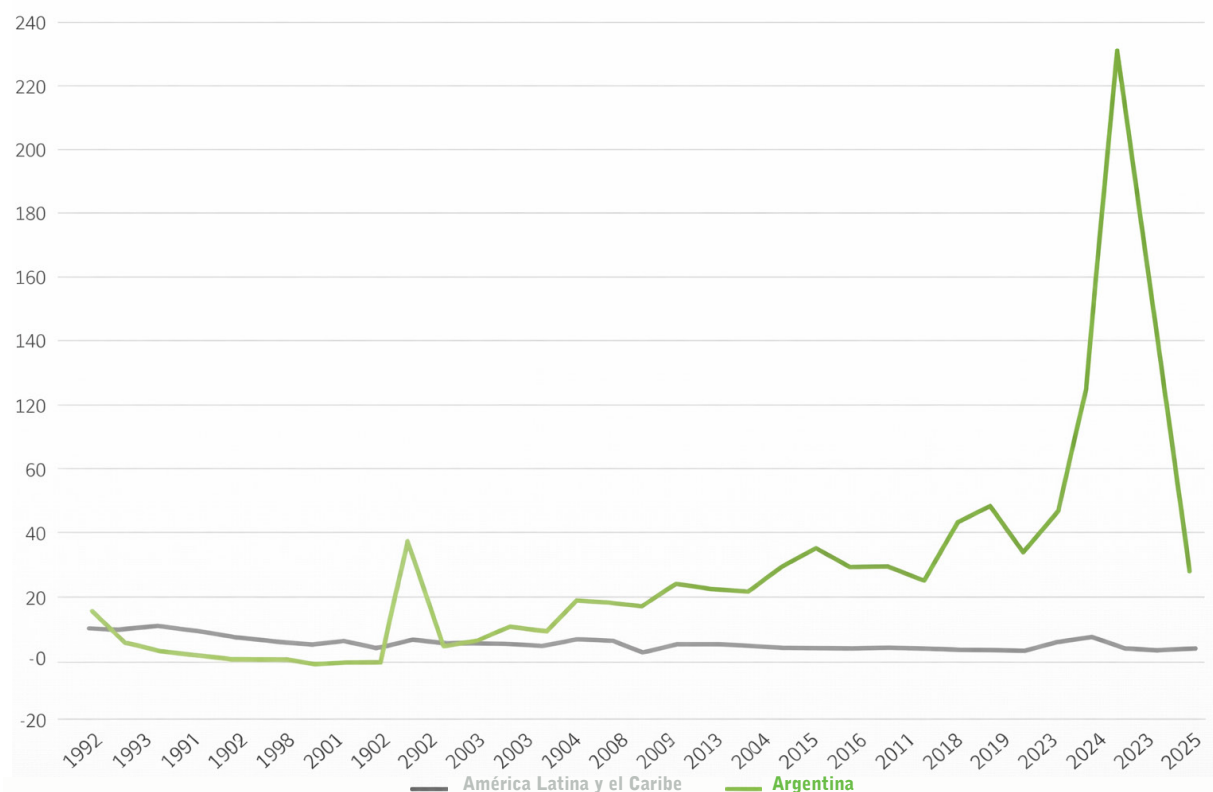
El documento se estructura de la siguiente manera. En la primera sección, se hace un muy breve repaso de la evolución reciente de dos indicadores clave de la Argentina: PIB per cápita y pobreza. En la segunda sección, se plantean tres ejes sobre los cuales renovar las ideas en el progresismo: la macroeconomía, la cuestión productiva y la calidad del Estado. Por último, se plantean algunas reflexiones de cierre.

1. El prolongado retroceso de la economía argentina

Milei no nació de un repollo: es el resultado de un prolongado deterioro de las condiciones económicas y sociales. ¿De cuándo data tal deterioro? Las primeras señales claras se dieron hacia 2007, cuando la Argentina empezó a tener

niveles de inflación de los más altos del mundo y muy por encima de la media regional (gráfico 1). Sin embargo, hasta 2011 la economía argentina siguió creciendo considerablemente. Y los indicadores sociales recién empezaron a empeorar sensiblemente a partir de 2017. Podríamos decir que llevamos casi 20 años de inestabilidad de precios, 14 de contracción económica y 8 de retroceso social.

Gráfico 1: Variación anual de precios en la Argentina y América Latina, 1992-2025



Fuente: Elaboración propia en base a Argendata y FMI (World Economic Outlook de octubre de 2025). Los datos toman la inflación al final del período. El dato de 2025 es el estimado en el WEO de octubre de ese año.

Sobre la inflación y la inestabilidad macroeconómica nos detendremos más adelante. Ahora nos focalizaremos en las otras dos dimensiones mencionadas: actividad económica y condiciones sociales.

Luego de la fuerte recuperación económica tras la salida de la crisis de la convertibilidad, la economía argentina viene experimentando un

sostenido declive desde 2011. Entre ese año y 2024, el PIB per cápita cayó casi un 10%, mientras que en el mundo subió un 30% y en América Latina –de modesto desempeño– un 10%. La Argentina tuvo en 2024 el PIB per cápita más bajo desde 2006 (con excepción del pandémico 2020)¹.

La trayectoria argentina es de las peores del

1 Datos del Banco Mundial, via Our World in Data. Se toman datos en dólares constantes a paridad de poder adquisitivo.

mundo. De 186 países con datos, hubo 155 que crecieron desde 2011 y 31 que se contrajeron. La Argentina está dentro del segundo grupo, compuesto casi exclusivamente por economías muy pobres (como Congo, Angola o Haití), en guerra (como Palestina o Ucrania), dependientes de una única *commodity* (como Qatar, Kuwait u Omán) o con un colapso económico autoinfligido (como Venezuela). Dentro de la región, el desempeño argentino es el peor de todos, si no se consideran Venezuela y Haití.

El paupérrimo desempeño económico argentino queda aún más en evidencia al mirar qué países nos superaron en PIB per cápita desde entonces

(gráfico 2). En 2011, la Argentina tenía un PIB per cápita de 29.430 dólares (ajustados por paridad de poder adquisitivo), superior al de Lituania, Croacia, Polonia, Hungría, Kazajistán, Rumania, Uruguay, Bielorrusia, Chile, Letonia, Antigua y Barbuda, Panamá, Seychelles, Malasia, Bulgaria, Turquía, Montenegro, Mauricio, Costa Rica y Serbia. Producto de que todos estos países crecieron desde entonces (y de que la Argentina se contrajo), hoy nos superan. La Argentina pasó así de ser el país de mayor PIB per cápita de la región (y superior al de la mayoría de los países del este europeo) a quedar cómodamente por detrás de los líderes de ambas regiones.

Cuadro 1. PIB per cápita de la Argentina y países seleccionados, 2011 y 2024

País	2011	2024	Variación
Argentina	29.426	26.547	-10%
Lituania	29.241	47.169	61%
Croacia	28.776	42.631	48%
Polonia	28.522	45.113	58%
Hungría	28.415	40.702	43%
Kazajistán	27.946	35.905	28%
Rumania	26.148	40.608	55%
Uruguay	26.099	32.039	23%
Bielorrusia	25.405	29.038	14%
Chile	25.366	30.183	19%
Letonia	25.309	38.936	54%
Antigua y Barbuda	25.024	29.562	18%
Panamá	24.999	36.426	46%
Seychelles	24.406	29.242	20%
Malasia	24.116	34.072	41%
Bulgaria	22.312	34.083	53%
Turquía	21.439	35.294	65%
Montenegro	20.081	27.852	39%
Mauricio	19.556	27.317	40%
Costa Rica	19.255	26.973	40%
Serbia	17.986	26.884	49%

Fuente: Elaboración propia en base al Banco Mundial (via Our World in Data). Los datos están en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo.

Es muy difícil que una caída del PIB per cápita no impacte en los indicadores sociales, como la pobreza. Con una torta más chica, es muy complicado que los más humildes vivan mejor. Solo podría hacerse con una gran redistribución del ingreso, lo que en un contexto de contracción económica supone por definición quitarles a los hogares más pudientes para darles a los más pobres. Por supuesto, el conflicto distributivo afloraría con gran virulencia en un escenario así.

A la inversa, es improbable que una suba del PIB per cápita no tenga efectos benéficos en la pobreza. Puede ocurrir esto, si el crecimiento económico va acompañado de un brutal deterioro de la desigualdad que más que compense las bondades del crecimiento. En la Argentina sabemos de esto: el período 1993-1998 fue de fuerte crecimiento (15% en términos per cápita) pero la suba de la desigualdad fue tan marcada que aun con crecimiento la pobreza trepó 9 puntos. La experiencia de la Argentina de la década de 1990 es una muy *rara avis* en la historia de la humanidad: en general, la enorme mayoría de los casos muestra que cuando la economía crece, la pobreza baja.

Para analizar lo ocurrido a partir de 2011, tomaremos como referencia la línea de pobreza de 15,2 dólares por día, a paridad de poder adquisitivo, que es muy similar a la que usa hoy

la Argentina.

Entre ese año y el segundo semestre de 2024, la pobreza por ingresos en la Argentina subió casi 9 puntos, del 30,2% al 39% (el grueso del deterioro ocurrió a partir de 2017). Solo hubo 4 países en donde subió todavía más: Líbano, Siria, Palestina y Surinam². En más del 70% de los países, la pobreza bajó. Como se ve en el cuadro 1, en casi toda la región la pobreza se redujo. En 2011, la Argentina tenía niveles de pobreza similares a los de Uruguay, y hoy el país vecino está en el 21,7%, 17 puntos menos que nosotros. Chile tenía un 56,7% de pobres y hoy el 29,2%. Costa Rica también nos sobrepasó: pasó del 45,6% al 35,5%. Y, si bien siguen teniendo mayor pobreza que la Argentina, países como Panamá, Brasil, Paraguay, México y Colombia se nos fueron acercando gradualmente.

Por fuera de la región hubo muchos países que en 2011 estaban peor que nosotros y hoy están mejor: Bosnia y Herzegovina, Bielorrusia, Hungría, Bulgaria, Malasia y Letonia tenían más pobres que la Argentina entonces. En 2024, todos registraron tasas de pobreza inferiores al 25% y, en algunos casos, menores al 10%. Nótese que casi todos los países mencionados son los que nos superaron en PIB per cápita, reflejo de la alta correlación entre este indicador y la dinámica de la pobreza.

Cuadro 2. Tasas de pobreza por ingresos, Argentina y países seleccionados, 2011-2024

País	2011	2024	Diferencia
Colombia	71,8%	63,7%	-8,1%
México	72,0%	58,1%	-13,8%
China	87,2%	51,3%	-35,9%
Paraguay	65,0%	51,0%	-14,0%
Brasil	57,6%	46,2%	-11,4%
Tailandia	63,4%	43,4%	-20,0%
Panamá	52,2%	41,7%	-10,5%
Argentina	30,2%	39,0%	8,8%
Costa Rica	45,6%	35,5%	-10,1%
Chile	56,7%	29,2%	-27,5%

País	2011	2024	Diferencia
Bosnia y Herzegovina	35,2%	21,8%	-13,4%
Uruguay	28,6%	21,7%	-6,9%
Bielorrusia	57,5%	17,8%	-39,7%
Hungría	33,2%	15,1%	-18,0%
Bulgaria	50,3%	13,7%	-36,6%
Malasia	40,0%	13,3%	-26,6%
Letonia	39,8%	9,4%	-30,4%
Lituania	30,6%	8,3%	-22,3%
Croacia	29,4%	6,9%	-22,4%

Fuente: Elaboración propia en base a la Poverty Inequality Platform del Banco Mundial. Se tomó la línea de 15,2 dólares por día ajustados por paridad de poder adquisitivo, que es una línea similar a la que el INDEC utiliza actualmente para medir la pobreza en la Argentina.

Son muchos los factores que explican el pésimo desempeño económico y social de la Argentina. Pero hay uno que destaca sobre el resto: la pérdida de la estabilidad macroeconómica. Empezó a gestarse durante el kirchnerismo, se profundizó con el fuerte endeudamiento y la mala gestión macroeconómica del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y llegó a un extremo bajo el disfuncional gobierno de Alberto Fernández.

2. Tres ejes para renovar las ideas del progresismo argentino

2.1. Macroeconomía

Idea fuerza: La estabilidad macroeconómica debe estar al tope de las prioridades, aun si eso supone pagar ciertos costos de corto plazo

Vengo conversando con muchos progresistas latinoamericanos. Suele repetirse una frase: "Apoyo a mi gobierno –Boric, Sheinbaum, Lula, Petro–, pero me gustaría que fuera menos ortodoxo en lo económico". Mi respuesta es siempre la misma: "Vengo del futuro. La Argentina fue extraordinariamente heterodoxa. Terminamos con un 200% de inflación y Milei en la presidencia. Está bien pensar más allá de lo posible, pero apenas tengan un poco de inflación,

En la próxima sección, nos centraremos en tres ejes que consideramos prioritarios (aunque no excluyentes) que sean abordados en una renovación del progresismo. Dado que la Argentina se diferencia de casi todo el resto del mundo –para mal– en la cuestión macroeconómica, comenzaremos por allí.

den marcha atrás y sean todo lo ortodoxos que tengan que ser".

Cada vez que tengo esos diálogos, recuerdo conversaciones con mi padre. Cuando yo era chico hablaba de los límites de la democracia, y él me decía: "No la valorás lo suficiente porque nunca viviste en dictadura". Algo parecido veo hoy en algunos colegas latinoamericanos: no dimensionan lo imposible que es mejorar las condiciones de vida cuando la inflación es más de diez veces la media regional. La Argentina tan desacoplada de la región en materia inflacionaria no es un fenómeno que se dio siempre, sino producto de la gran divergencia que nuestro país tuvo a partir del año 2007 (Gerchunoff y Rapetti, 2023).

Durante mucho tiempo, quienes venimos del progresismo y la heterodoxia económica menospreciamos la importancia de la estabilidad macroeconómica y de una inflación baja.

Decíamos que cierta inflación era buena porque era reflejo de una puja distributiva que contribuía a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero subestimamos que una vez que se desata, es muy difícil controlarla. Y así fue como se fue yendo de las manos crecientemente: de un 10% anual en 2006 a más de un 20% en casi todo el período 2007-2015, para ascender al 50% en 2019 y a superar el 200% en 2023.

La inflación no tiene una sola causa. Responde a presiones de los costos (tipo de cambio, salarios, tarifas), a la inercia previa, a la velocidad a la que se abre o cierra la economía y también a las expectativas.

El progresismo descuidó muchas de esas dimensiones. Las expectativas rara vez se vieron como relevantes. Y el tipo de cambio a menudo se salió de control por un manejo muy deficiente de variables macroeconómicas clave, como la baja tasa de interés, el déficit fiscal (y la limitada capacidad de endeudamiento) y el sesgo anti-exportador de muchas políticas.

La tasa de interés fue casi siempre inferior a la inflación, fomentando el ahorro en dólares y las presiones sobre el tipo de cambio, con el consiguiente impacto en precios (Telechea, 2023). Los déficits fiscales crecientes (producto

de la voluntad política por aumentar siempre el gasto público, con el objetivo de generar mejoras de corto plazo en la actividad económica y en el nivel de vida de las mayorías) se financiaron con emisión, y ese exceso de pesos terminó presionando sobre el mercado cambiario.

¿Era inevitable que financiáramos el déficit con emisión? No. En efecto, en 2006 teníamos condiciones muy favorables para financiarlo con deuda: poseíamos un riesgo soberano bajo y una alta credibilidad de la política económica. Pero empezamos a erosionar esos activos de forma persistente desde 2007, cuando la respuesta ante las presiones inflacionarias internacionales fue falsificar las estadísticas públicas, que muchos progresistas celebraron porque “permitiría pagar menos deuda atada a inflación”. Esa pérdida de confianza nos dejó sin acceso al crédito y con la emisión como la principal fuente de financiamiento.

Durante mucho tiempo, dijimos que la emisión era inocua, que no causaba inflación. No reconocíamos la posibilidad de que los sobrantes de pesos podían ir a comprar dólares. Y repetimos eso para justificar déficits crecientes y disimular nuestra incapacidad de ser más eficientes en el uso del gasto público o de contener ciertas demandas sociales.

Cuadro 3. Índice de exportaciones (en cantidades) en la Argentina y otros países de América Latina (2005-2023), 2005 = 100

País	2005	2007	2011	2015	2019	2022	2023
Argentina	100	111	115	93	112	107	89
Bolivia	100	118	145	182	167	202	164
Brazil	100	108	106	115	130	144	156
Chile	100	111	112	118	121	121	119
Colombia	100	114	137	166	165	154	156
Ecuador	100	112	121	145	153	170	177
Mexico	100	104	119	145	161	170	175
Peru	100	96	98	114	146	165	165
Paraguay	100	117	129	150	133	117	170
Uruguay	100	113	136	146	156	186	162
Venezuela, RB	100	90	79	60			

Fuente: Elaboración propia en base al Banco Mundial.

Pero hay más: también afectamos la capacidad de generación de dólares de la economía a partir de un sesgo antiexportador de la política económica, que hizo que fuéramos el país de la región de menor dinamismo exportador desde 2007 hasta la actualidad, con la excepción de Venezuela (cuadro 2). Pusimos retenciones a las exportaciones, un impuesto que casi no existe en otros lugares del mundo, con fines fiscales y para mejorar en el corto plazo el salario real. Y eso en parte fue consecuencia de la incapacidad del Estado para cobrar mejores impuestos que no dañen la producción, como el gravamen a la tierra o ganancias (Allan *et al.*, 2024). Mejorar las capacidades de administración tributaria, nacional o provincial para cobrar impuestos menos distorsivos y combatir la evasión fiscal rara vez fue una prioridad.

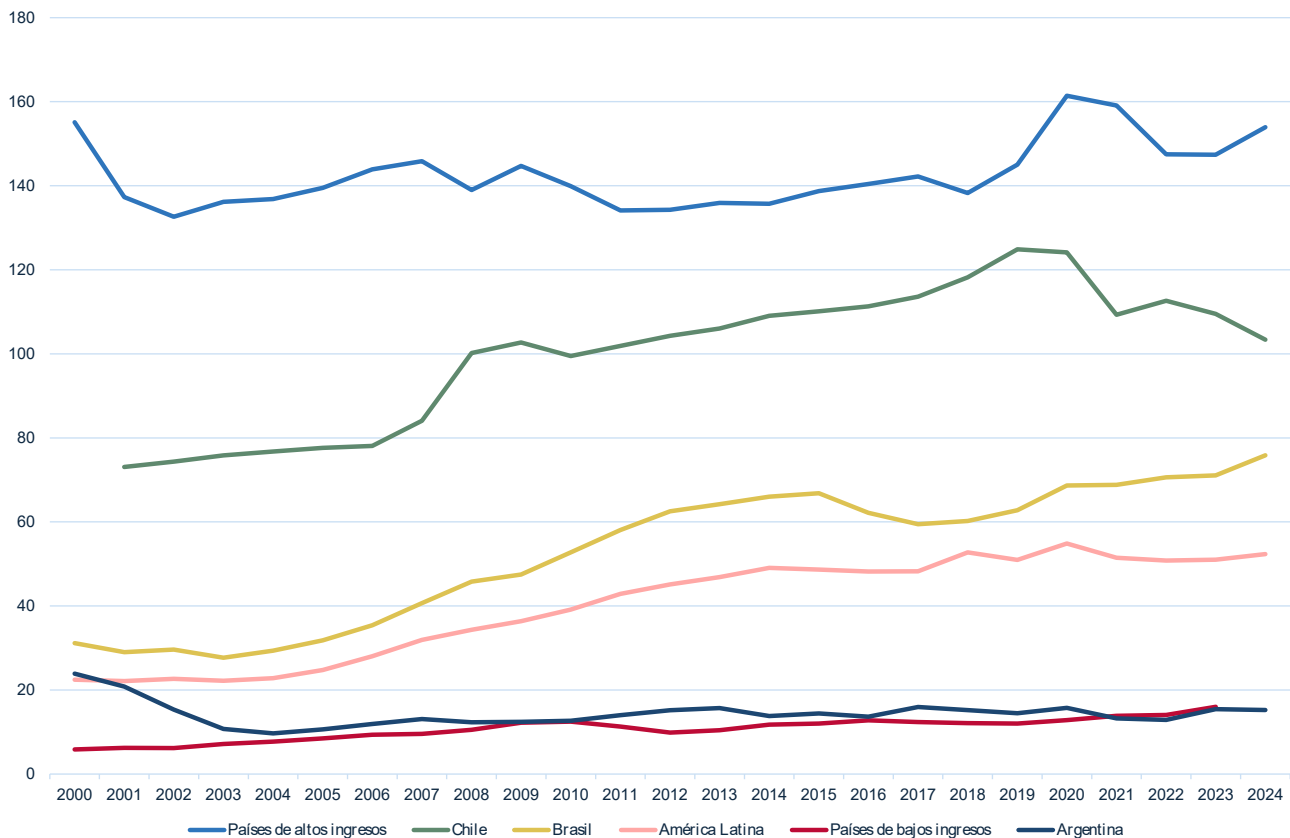
Poner retenciones tiene, por supuesto, efectos. No es cierto, como muchas veces dijimos, que "la producción en la Pampa Húmeda camina igual porque la renta es infinita". Las retenciones limitan la producción fuera de las zonas más fértiles y cercanas al puerto, como las del norte del país (ibíd.). Pero también debilita la inversión y los rendimientos, incluso en la Pampa Húmeda. Por ejemplo, Bisang *et al.* (2022) muestran que un punto de suba de retenciones reduce los rendimientos de maíz y trigo en un 0,15% y un 0,1%, respectivamente. Brasil nos viene superando cada vez más en producción agrícola. Y, si bien eso obedece a varios factores, uno es la

cuestión de las retenciones.

Además, pusimos cupos de exportación a distintos bienes, como carnes o energía (Schteingart *et al.*, 2024a). Y, si bien en el corto plazo eso mejora el salario real porque hay más oferta en el mercado interno, en el mediano la producción se reduce. Y así fue como durante los primeros ocho años del kirchnerismo fuimos rompiendo el sistema energético (que luego tuvo un impacto dramático en la escasez de dólares), y nuestras exportaciones de carne se cayeron a un piso histórico. De nuevo, escasez de dólares autoinfligida.

Pero la inflación no solo tiene causas, tiene consecuencias enormes. Es un gran desordenador de la vida cotidiana. Imposibilita planificar cualquier cosa, tanto para las personas como para las empresas. Al crear incertidumbre, la gente confía menos y el sistema crediticio queda en una dimensión diminuta: la Argentina tiene un crédito sobre PIB parecido al de los países más pobres del mundo, y a años luz de los de la región (gráfico 2). Al haber menos crédito hay menos inversión y menos consumo y, con ello, menor potencial de crecimiento. Lloramos "reticencia inversora" en los empresarios sin tener en cuenta que con una macro tan inestable la inversión es un milagro solo posible si se garantizan extraordinarios márgenes de rentabilidad que compensen la incertidumbre y el riesgo argentino.

Gráfico 2. Crédito doméstico al sector privado (% del PIB), 2000-2023



Fuente: Elaboración propia en base al Banco Mundial.

La inflación también rompe la confianza social en la moneda propia. Y eso dispara al infinito la demanda de dólares para atesoramiento y la llamada "fuga de capitales". La moneda propia es un bastión central de la soberanía nacional. Resulta paradójico que, desde el progresismo, enarbolemos permanentemente banderas de soberanía habiendo sido grandes responsables de la destrucción de la moneda local.

Desde el progresismo debemos asumir que solo podremos gobernar la Argentina en tanto entendamos que si retomamos una senda inflacionaria fracasaremos estrepitosamente. Y esto supone revisar muchas de las ideas que defendimos durante años y probaron ser mucho más problemáticas de lo que creíamos.

En un país con baja credibilidad y sin acceso a los mercados, no podemos tener déficit fiscal. Recuperemos la credibilidad y bajemos el riesgo país, y así podremos crear una reputación que

nos permita tener un déficit fiscal en el futuro y ampliar nuestro espacio de política fiscal. Es cierto que la mayoría del mundo tiene déficit fiscal. Como también es cierto que la mayoría del mundo tiene un riesgo soberano menor al argentino.

Recuperar la credibilidad ante los mercados va a suponer hacer cosas que no nos gustan o que, paradójicamente, pueden limitar el espacio de política en el corto plazo, como déficit cero por un buen tiempo. O independencia del Banco Central, dado que cuando la eliminamos terminamos financiando el déficit con emisión y no generamos estabilidad macroeconómica sino lo contrario. Sí, vamos a tener que sobregirar ortodoxia un tiempo, como hizo Lula cuando asumió en 2003 o como la mantuvieron todos los progresismos latinoamericanos que mejoraron sosteniblemente los indicadores sociales, como los del Frente Amplio en Uruguay, Lula en Brasil, la Concertación y Boric en Chile, Petro

en Colombia, o AMLO y Sheinbaum en México. Está bien tensionar la ortodoxia económica, pero que “se doble y no se rompa”. En la Argentina la rompimos, y las consecuencias las estamos pagando hasta hoy.

2.2. Estructura productiva

Idea fuerza: La política productiva es clave, pero no debemos producir todo ni de cualquier forma

Milei quizá logre estabilizar la macroeconomía. Pero la estructura productiva que dejará su modelo –basado en la virtual desaparición de la inversión en política industrial, ciencia y tecnología, y en un rápido aumento de las importaciones a costa de la producción local– será más simple. Y que sea más simple es un problema por varios motivos, dos de ellos centrales.

Primero, una estructura productiva menos compleja reduce las chances de crecer en el largo plazo (Hidalgo y Hausmann, 2009). Segundo, si el perfil productivo se apoya cada vez más en sectores extractivos –como energía y minería– poco encadenados con el resto del entramado, se corre el serio riesgo de generar mínimos empleos formales.

Milei no cree en la política industrial. Para él, y parafraseando a uno de sus economistas preferidos (Gary Becker), “la mejor política industrial es aquella que no existe”. La política industrial es considerada distorsiva del mercado, creadora de ineficiencias y de “tongos” y “curros”³ hacia ciertos sectores y empresas. Su argumento considera que pocas cosas mejores para la industria que la estabilización macroeconómica, cuyo poder de fuego para inducir inversiones y transformaciones es mayor que cualquier

subsidio, crédito estatal o regulación. A pesar de esta narrativa, en la práctica el gobierno de Milei introdujo una política productiva muy potente y orientada a algunos sectores en particular: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga grandes beneficios fiscales y cambiarios a los proyectos de inversión de más de 200 millones de dólares en ciertos sectores, principalmente energía y minería.

Más allá de que en la práctica el RIGI tiene claras implicancias sectoriales, en la mirada de Milei, al igual que en la liberal en general, hay algo más profundo: la idea de que la estructura productiva es neutral en términos de prosperidad a largo plazo. No hay sectores cualitativamente mejores que otros: son todos iguales. Por eso, es indiferente producir bananas que satélites o, como decía un viejo funcionario de la última dictadura militar, “da lo mismo producir acero que caramelos”⁴.

Sin embargo, esta mirada se choca con la evidencia empírica: las actividades productivas no son todas iguales. Hay algunas (las más complejas e innovadoras, que por lo general se encuentran en ciertos sectores de la industria manufacturera o en los servicios basados en el conocimiento) que tienen más potencial para generar riqueza. Producir maquinarias, semiconductores, medicamentos, vehículos, software o servicios especializados de consultoría suele ser más difícil que producir ropa, queso o petróleo. Y que sea más difícil supone dos cosas: a) que son relativamente pocos los jugadores que lo hacen, lo que permite desempeñarse en mercados oligopólicos con mayor capacidad de obtener rentas, que a su vez permiten mejores salarios y más pagos de impuestos que financian el estado de bienestar, y b) que demandan mano de obra muy calificada.

La estabilidad macroeconómica es una condición de posibilidad de cualquier proceso de desarrollo

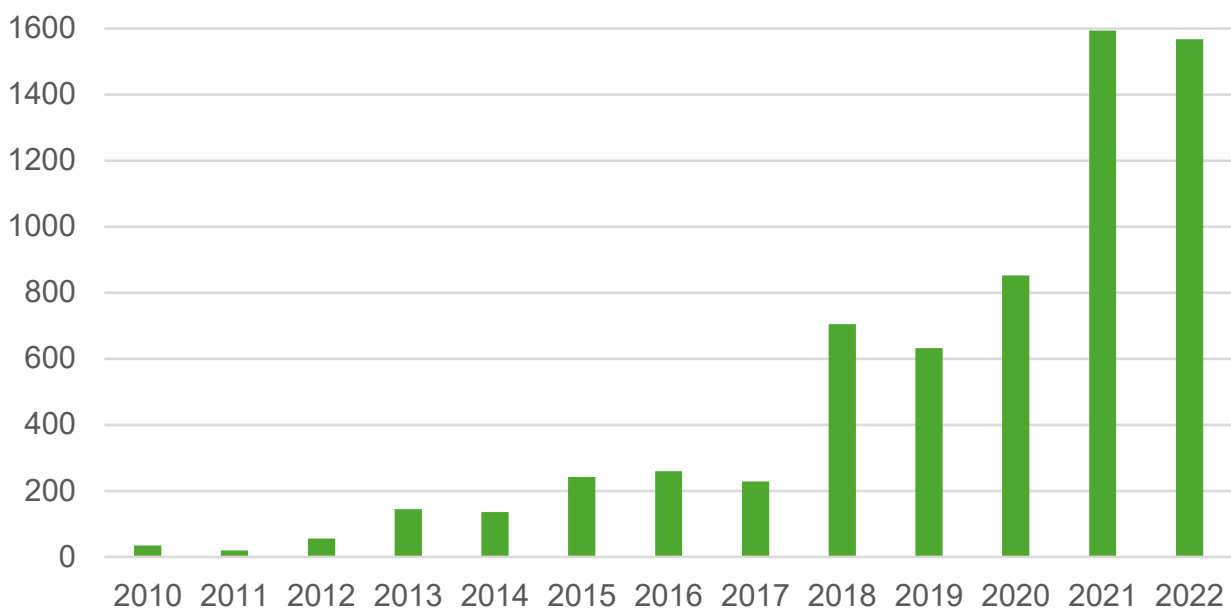
3 En el debate público argentino, “tongos” y “curros” se usan de manera coloquial para referirse a arreglos discrecionales, poco transparentes o directamente corruptos entre el Estado y empresas privadas, que implican la asignación de beneficios (subsidios, protección comercial, contratos o regulaciones favorables) sin criterios claros, evaluación de resultados ni rendición de cuentas.

4 La frase corresponde a Alejandro Estrada, secretario de Comercio en la última dictadura.

con justicia social, como dijimos en el primer punto. Pero la estabilidad macroeconómica no garantiza el desarrollo. El mundo tiene cerca de 200 países. Con estabilidad macroeconómica y baja inflación hay más de 150. Pero desarrollados solo hay cerca de 40. Lo que diferencia a los países desarrollados de los estables pero no desarrollados es justamente la estructura productiva. En todos los países desarrollados, la estructura productiva tiene un alto peso de las actividades intensivas en conocimiento e innovación, que son las que poseen mayor potencial para generar riqueza en el largo plazo. Y en la gran mayoría de esos países las actividades que impulsan la innovación son las manufacturas de alta tecnología y los servicios basados en conocimiento.

La política industrial está de regreso en el mundo (gráfico 3). Los países (principalmente los desarrollados) invierten cada vez más en política industrial, porque consideran que la estructura productiva importa. No solo importa para crear riqueza y bienestar, sino también en términos de soberanía y seguridad nacional. La pandemia de COVID-19 dejó en evidencia que producir fronteras adentro incrementa los márgenes de autonomía de las naciones. Quien producía respiradores y vacunas salvó más vidas que quien no lo hacía. Y hoy, muchos países de Occidente han caído en la cuenta de que, si dejan que todo se produzca en China, no solo regalarán el control de las tecnologías del futuro (como las digitales y las verdes) sino que perderán soberanía y poder (Schteingart *et al.*, 2024b).

Gráfico 3. Evolución de las políticas industriales en el mundo (cantidad) (2010-2022)



Fuente: Fundar con base en Juhász *et al.* (2023).

Como dijimos, la gran mayoría de los países desarrollados se especializa en manufacturas sofisticadas y servicios basados en el conocimiento. Pero es cierto que hay algunos países muy desarrollados altamente especializados en recursos naturales. Es el caso de Noruega, Nueva Zelanda y Australia. Si a estos países les fue bien a partir de economías primarizadas, ¿por qué la Argentina no debería emular su camino?

Lo que ocurre es que estos países difieren de la Argentina en dos cosas: a) han logrado generar mucho gasto en innovación a partir de los recursos naturales, y b) tienen muchos más recursos naturales per cápita que la Argentina. El caso de Australia –a menudo el modelo a seguir por parte de los liberales, con poca industria y mucho recurso natural y servicios– es interesante. Es un país que tiene casi el territorio de Brasil, pero una población que apenas supera

la mitad de la de la Argentina (26 millones de habitantes). Esto da como resultado una densidad demográfica cinco veces inferior a la argentina y, por tanto, recursos naturales per cápita extraordinariamente altos, que alcanzan para incluir al mercado laboral al conjunto de la población del país (Argentina Productiva, 2023). No solo eso: Australia ha logrado innovar en base a los recursos naturales (un ejemplo es que ha sido históricamente un gran jugador en *software* para la minería), y que parte de ese éxito tuvo como trasfondo una inversión sostenida en ciencia y tecnología (Schteingart, 2017). En cambio, en la Argentina los gobiernos que dicen tener a Australia como faro, la desfinancian. El modelo resultante es algo más parecido a Perú que al país de los canguros.

Ahora bien, que la estructura productiva sea importantísima para el desarrollo a largo plazo –y que la política productiva sea una herramienta clave para transformarla– no significa que la Argentina tenga que producir todo ni de cualquier forma, ni que más política productiva sea siempre mejor. Los gobiernos progresistas del siglo XXI tuvieron el sueño de “reindustrializar” la Argentina. Pero a menudo las políticas industriales tuvieron serios problemas de concepción, diseño e implementación, y varias de ellas llevaron a que el país se convirtiera en una de las economías más cerradas del mundo⁵. O peor aún: fue frecuente que la búsqueda de “reindustrializar” se diera con una mirada nostálgica y poco comprensiva de los enormes cambios en la geografía económica mundial de los últimos cincuenta años, caracterizados por el auge de Asia. Esta región pasó de representar el 15% del PIB industrial mundial en 1970 a ostentar el 55% en la actualidad⁶, y se convirtió en un tsunami competitivo en muchas manufacturas intensivas en mano de obra (como indumentaria, calzado o juguetes) y que requieren de grandes escalas para ser viables (como acero o electrónica).

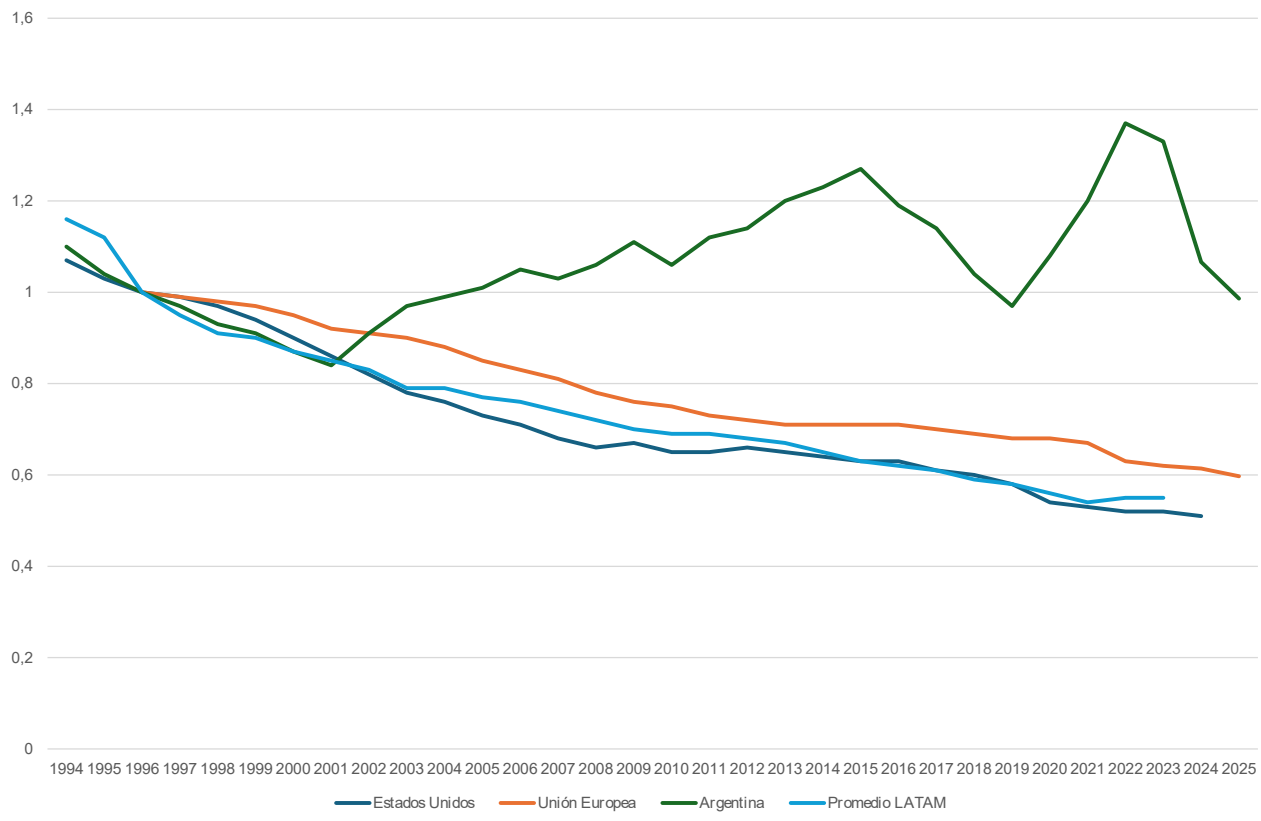
Está lleno de ejemplos de esa mirada nostálgica en pos de “reindustrializar”. Durante los gobiernos del peronismo (2003-2015 y 2019-2023), hubo un apoyo desmesurado y con escasos resultados a industrias que habían florecido en la Argentina durante la vieja sustitución de importaciones y que hoy solo pueden sobrevivir en base a una extraordinaria protección. El caso testigo de esta situación es la industria textil-indumentaria y el calzado. Llegaron a ser más del 25% del PIB industrial argentino a mediados de la década de 1940, pero hoy no alcanzan más que el 4% (Schteingart y Sidicaro, 2025). En los gobiernos progresistas se las sobreprotegió con el objetivo de “sostener el empleo industrial” y, en momentos de escasez de divisas, “cuidar los dólares”.

El resultado fue que los precios de la ropa y muchos otros bienes subía casi siempre por encima de la inflación, cuando en el resto del mundo ocurría lo contrario (gráfico 5). Aun más, esto tuvo un carácter regresivo, ya que las clases medias y altas pudieron salirse del cautivo mercado interno para comprar ropa barata en Chile o en Miami. El turismo de compras al exterior no solo es regresivo, sino que tiene tres impactos negativos: al desplazar la demanda hacia comercios de otros países, se deja de crear empleos en el *retail* doméstico (lo cual indica que a los empleos que se generan por tener una industria protegida local deben sustraerse los que se pierden por comprar afuera). A su vez, el objetivo de ahorrar divisas no necesariamente se cumple, dado que en lugar de importar directamente una remera de Asia a precio de fábrica se la importa comprando en el comercio chileno o de Miami, cuyo valor es más alto dado que incluye los márgenes del comercializador. Y, a su vez, el Estado deja de percibir ingresos fiscales, ya que la compra de la prenda en Chile o en Miami redonda en recaudación para los Estados de esos países, no para el de la Argentina.

5 Sobre un total de 191 países con información, entre 2013-2022 la Argentina estuvo en el puesto 190 en el ratio de importaciones sobre PIB, solo por encima de Sudán (Schteingart *et al.*, 2024c).

6 Dato tomado de UNSTATS.

Gráfico 4. Evolución de los precios relativos de la ropa y el calzado en la Argentina, Estados Unidos, América Latina y Unión Europea, 1994-2025 (1996 = 1)



Fuente: Elaboración propia en base a Schteingart et al. (2024d), OCDEStat e INDEC.

Nota 1: Los datos de 2025 son hasta octubre.

Nota 2: Cuando la línea sube, eso indica que los precios de la ropa y el calzado suben por encima del promedio de los bienes y servicios y viceversa cuando baja.

¿Sirvió proteger estos sectores para al menos construir ventajas competitivas duraderas? Tampoco. El empleo creado en estos ámbitos fue exiguu y, ante el mínimo cambio hacia la apertura comercial, se desmoronó como un castillo de naipes. Por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández, la industria textil-indumentaria y del calzado fue una de las más beneficiadas por los controles a las importaciones, que permitieron a las empresas recomponer márgenes producto de una menor competencia. La ropa y el calzado estuvieron así entre los capítulos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que más subieron (Schteingart et al., 2024d).

El precio que se pagó terminó siendo demasiado alto para crear apenas 12.000 empleos formales, que se destruyeron en menos de dos años de gobierno de Milei⁷. Y no solo eso: se trata de sectores cuyo empleo tiene peores que la media de la economía (con menores salarios y mayor informalidad), y en donde la innovación es muy baja, algo muy diferente a lo que ocurre con las manufacturas de alta tecnología en la que se especializan los países desarrollados y en donde se está dando la competencia geopolítica actual que motiva el retorno de la política industrial. Es cierto que existen muchos emprendedores en estos sectores con gran capacidad de diseño y potencial de hacer productos diferenciados y de

7 Entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2023, la industria textil-indumentaria, cuero y calzado pasó de tener 108.800 puestos de trabajo asalariados formales a 121.100. Para septiembre de 2025, la cifra había bajado a 105.000. Los datos corresponden a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

calidad, pero bajo un mercado cerrado, con poca competencia y con insumos caros (producto de las trabas a la importación) es muy difícil que puedan desarrollarse.

Un ejemplo todavía más dramático es el impulso sostenido que los gobiernos progresistas dieron a industrias ensambladoras de mínimo valor agregado y en donde la posibilidad de construir ventajas competitivas duraderas es muy baja, como la electrónica de Tierra del Fuego o las motos. Estas industrias solo existen como producto de una política industrial que ofrece cuantiosos beneficios a las empresas, para que generen pocos miles de puestos de trabajo. El costo-beneficio de estas medidas rara vez es discutido porque “total, es empleo industrial y hay que cuidarlo”. Y, en los casos en que se lo discute (como se intentó hacer en 2020-2021), el *lobby* de los empresarios, los sindicatos y la política fueguina termina siendo suficientemente poderoso como para que nada cambie.

Pero lo cierto es que estos sectores no generan encadenamientos productivos ni mucho menos innovan, y simplemente se limitan a armar kits de partes importadas. El costo fiscal y social es demasiado grande: las exenciones tributarias de Tierra del Fuego le cuestan al Estado argentino cerca de 1.000 millones de dólares al año, lo que equivale a dos veces al presupuesto del Conicet (Hallak *et al.*, 2023).

En contraste, los gobiernos progresistas han tenido una actitud a menudo hostil con una rama de la industria manufacturera que está entre las más competitivas, que ha sido de las más resilientes a la pésima macroeconomía argentina, que es muy federal y que posee un gran potencial exportador: la agroindustria. Este sector representa cerca del 30% del PIB industrial, es el principal empleador de todas las ramas fabriles y viene ganando peso en la estructura industrial argentina desde hace 50 años (Schteingart y Sidicaro, 2025). Sin embargo, rara vez es pensado dentro del imaginario progresista como parte de la industria. Vale una simple anécdota: siempre que voy a un espacio progresista a debatir ideas, pido a mis interlocutores que me digan “qué sector es el primero que se te viene a la mente cuando pensás en industria”. Se toman

unos segundos y las respuestas siempre son (en distinto orden): metalurgia, automotriz, textil. Muy rara vez aparece alimentos en ese listado, y a pesar de que es el bloque industrial más relevante de todos en la Argentina.

Esa tara epistemológica no es fruto del azar. Es consecuencia de una mirada anticuada de la industria, que considera que las ramas de base primaria son “peores” que el resto. Como resultado, a estas industrias se las ha penalizado (con retenciones a las exportaciones mayores a las del resto de las manufacturas, con cupos de exportación o con la renuencia a explorar acuerdos de libre comercio por fuera del Mercosur, por ejemplo), impidiendo que la Argentina despliegue por completo su potencial como jugador agroindustrial de relevancia. Nuestro país fue a contramano de la región, que en el contexto del auge asiático logró incrementar sus exportaciones agroindustriales. Algunos datos ilustran el punto: entre 2011 y 2022 la Argentina pasó de explicar el 3,1% de las exportaciones globales de productos agropecuarios y agroindustriales a explicar el 2,7%. En contraste, Brasil pasó del 5,6% del total al 6,5%, mientras que Chile, Uruguay y Paraguay mantuvieron relativamente estables sus participaciones (Schteingart *et al.*, 2024e).

De todos modos, esta mirada crítica de la política industrial en gobiernos progresistas no debe llevarnos a minimizar algunos grandes logros. Durante estos gobiernos, también se dio impulso —sea a partir de regímenes promocionales, de compras públicas o de inversión en el sistema de ciencia y tecnología— a sectores de avanzada, como satélites, reactores nucleares, industrias de la salud, servicios basados en el conocimiento y biotecnología (Schteingart *et al.*, 2024a). Y esa inversión cosechó frutos muy valiosos, como permitir que la Argentina sea hoy el único país de la región capaz de mandar satélites geoestacionarios de telecomunicaciones al espacio, de exportar radares y reactores nucleares o de ser, junto con Brasil, el principal polo biotecnológico de la región. Sin embargo, estas destacadas iniciativas hoy corren peligro como consecuencia del drástico desfinanciamiento de la política industrial bajo el gobierno de Milei. Sin dudas, un futuro gobierno progresista

debería retomarlas, apuntando a consolidar nichos de alta tecnología donde el país pueda ser competitivo.

Como mencionamos, los gobiernos progresistas incrementaron notablemente la inversión en ciencia y tecnología, permitiendo incrementar la base científica del país. Sin embargo, existe un vaso medio vacío que debemos tener en cuenta a la hora de reconstruirlo después de la catástrofe en la que se encuentra hoy producto del ajuste de Milei: durante la etapa de auge de la inversión pública, los resultados en materia de patentes o también de publicaciones científicas fueron modestos e incluso inferiores a los de otros países de la región. En 2003, la Argentina ocupaba el tercer lugar de la región en publicaciones en SCOPUS, por debajo de Brasil y México. Si bien casi se triplicaron las publicaciones desde entonces, la velocidad de aumento fue más lenta que en otros países, de modo que hoy estamos en el quinto lugar, superados por Chile y Colombia⁸. El desempeño en patentes es todavía más preocupante: entre 2003 y 2023 cayó de 1.114 a 675 (un 40% menos) la cantidad de patentes anuales solicitadas, mientras que en Brasil, Colombia, Chile y México se incrementó (Isaak y O'Farrell, 2025).

A partir de este diagnóstico, proponemos algunos lineamientos que un nuevo gobierno progresista debería promover en materia productiva.

- Por un lado, más que hablar de "reindustrializar", hablemos de "neoindustrializar". El Brasil de Lula viene utilizando el término "neoindustrialización" a partir de su plan "[Nova Industria Brasil](#)", que tiene seis misiones centrales: 1) cadenas agroindustriales sostenibles y digitales para la seguridad alimentaria, nutricional y energética; 2) complejo económico para la salud; 3) infraestructura, saneamiento, vivienda y movilidad sostenibles; 4) transformación digital de la industria para aumentar la productividad; 5) bioeconomía,

descarbonización y seguridad energética para garantizar recursos para las generaciones futuras, y 6) tecnologías de interés para la soberanía y la seguridad nacional.

En esta agenda hay varias cuestiones interesantes. Primero, hay un recorte temático claro: no se busca producir todo ni de cualquier forma. Las industrias tradicionales donde Brasil perdió ventajas comparativas (como textil-indumentaria y calzado) no están entre las priorizadas; en todo caso, se las aborda transversalmente desde la misión 4 para mejorar la productividad industrial. Segundo, hay una fuerte apuesta por densificar cadenas de valor en base al sector primario, donde Brasil construyó ventajas (misiones 1 y 5). Tercero, hay un interés explícito en promover sectores de alto dinamismo tecnológico (como las industrias de la salud y tecnologías de interés para la soberanía). Cuarto, transversalmente hay una gran apuesta por sacarle provecho a las oportunidades derivadas de la doble transición global: verde y digital. Quinto, al pensarlo como lógica de misiones, se busca resolver problemáticas sociales diversas (la sostenibilidad ambiental, la movilidad, la falta de vivienda, la alimentación, la salud, etc.) movilizándolo a sectores productivos estratégicos a tal fin. Aquí cabe mencionar que esto es lo mismo que intentamos hacer cuando, inspirados por el enfoque de Mazzucato (2022) elaboramos el Plan Argentina Productiva 2030 en 2022-2023. Sin embargo, una diferencia es que Brasil es más acotado en lo temático: siendo un país más grande, propuso 6 misiones, mientras que nosotros formulamos 11. Un abordaje futuro de la política industrial post Milei debería ser más específico, priorizando menos ejes pero aumentando la factibilidad de ir a fondo en ellas.

Algunas agendas productivas por priorizar a futuro en la Argentina incluyen la

8 Usamos el indicador de SCOPUS, dado que es el más completo hasta la fecha para medir publicaciones. Sin embargo, el dato debe tomarse con cierta cautela, habida cuenta de que países como Chile incentivan a sus científicos a publicar en revistas indexadas en esa base de datos, principalmente en ciencias sociales.

transformación del sistema agroindustrial para que sea más competitivo y sostenible, el aprovechamiento de oportunidades productivas derivadas de la transición energética (generación de cadenas productivas en torno a la minería, el gas, y las energías limpias y transición hacia la electromovilidad), la promoción de las industrias de la salud y el desarrollo del turismo basado en la gran biodiversidad argentina.

Asimismo, y retomando a Rodrik y Stiglitz (2025), deberíamos empezar a estudiar más seriamente las posibilidades de crear políticas industriales dirigidas a los servicios (comercio, construcción, transporte, cuidados, etc.), que son el sector que creará el grueso de los empleos del futuro. Varias ramas de la industria manufacturera serán claves para la generación de riqueza, para el dinamismo tecnológico, para mejorar la ecuación de divisas y para la soberanía, pero su rol relativo en la generación de empleo posiblemente continúe siendo declinante. En este sentido, cabe recordar que hoy el empleo industrial representa solo el 11% del total, cuando a fines de la década de 1950 rondaba el 30% (Schteingart y Sidicaro, 2025). Y es muy probable que ese porcentaje siga cayendo. Por ello se señala la importancia de una política industrial orientada a los servicios, a la mejora de su productividad y, consiguientemente, a las mejoras en las condiciones de empleo.

En suma, la “neointustrialización” no supone volver a construir la industria de la sustitución de importaciones. Es un término que va más allá de la industria en sí (incluyendo como parte de la estrategia de desarrollo a los sectores primarios y de servicios), siendo más realistas respecto de las ventajas competitivas potenciales de la Argentina (lo que supone abrazar con mayor énfasis a las cadenas agroindustriales y “dejar ir” a empresas que solo pueden sobrevivir con una protección permanente), pero sin perder la ambición de generar desarrollos tecnológicos en industrias de avanzada donde la Argentina puede soñar con

ser competitiva o donde ha logrado construir capacidades notables producto de décadas de inversión (como en las industrias de la salud, la biotecnología, la nuclear o la satelital). Además, la idea de “neointustrialización” supone tomar los desafíos ambientales como transversales a los complejos productivos, e idear cómo pueden tornarse una palanca para la innovación y el desarrollo productivo más que un mero costo para las empresas.

- Después del gobierno de Milei, no hay que volver a cerrar la economía como se hizo tras el gobierno de Macri. La Argentina sigue siendo uno de los países más cerrados del mundo (a pesar de la apertura comercial en curso), lo que ha implicado precios caros en los bienes, baja competencia y desestímulo a la innovación y a la calidad en muchos segmentos productivos donde la Argentina tiene talento por desplegar. En particular, debe evitarse –salvo en contadas excepciones– el uso de licencias no automáticas de importación, cuyo uso está sujeto a la discrecionalidad del funcionario de turno.

Ahora bien, una economía más abierta debe convivir con la existencia de herramientas que permitan incrementar la competitividad de las empresas locales, y la priorización de ciertos sectores. En este sentido, tras el gobierno de Milei sí será importante volver a contar con instrumentos de política industrial, como la inversión en bienes públicos como infraestructura, ciencia y tecnología, compras públicas, políticas de desarrollo de proveedores, banca pública, etc., pero sobre la base de una economía más abierta que en los últimos años.

- Una mención al respecto merece la necesidad de una reforma tributaria que premie la producción y la formalización. Actualmente, comparado con los países de la OCDE, la estructura tributaria argentina grava mucho la producción y poco a los ingresos y el patrimonio (Lódola *et al.*, 2024). Impuestos como el del cheque, ingresos brutos

y retenciones a la exportación son distorsivos y tienen un impacto muy negativo en los sectores transables, penalizan la generación de divisas y la generación de cadenas de valor más largas. Resulta clave reducirlos, e idealmente eliminarlos. Para que esto no redunde en una pérdida de recaudación, se puede actuar en tres frentes.

Primero, subir impuestos a los altos ingresos y al patrimonio (lo que incluye también una rediscusión de los tramos de mayor facturación del monotributo, cuya alícuota es muy reducida).

Segundo, reducir la gran evasión fiscal existente, estimada para el IVA en el 37% del PIB y muy superior a la de Colombia, Uruguay y Chile (que son inferiores al 25%)⁹. Para ello es central fortalecer las capacidades tecnológicas de las administraciones tributarias tanto a nivel nacional como subnacional (algo que Milei, para quien “el evasor es un héroe”, no tiene interés alguno en hacer). También es importante generar fuertes incentivos a la compra “en blanco” o digital (descuentos por uso de tarjetas o billeteras virtuales, loterías fiscales) y desincentivar el uso del efectivo (la controvertida propuesta de un “impuesto a la extracción de efectivo” hecha por Emmanuel Álvarez Agis merece un estudio más detallado). Todo ello debería venir acompañado de esfuerzos por promover una nueva moral tributaria, con una narrativa del estilo de “el evasor es culpable de que vos pagues muchos impuestos”.

Un tercer frente es la revisión de los gastos tributarios (exenciones fiscales y tratamientos diferenciales que hacen que el Estado deje de percibir impuestos por hasta el 3,5% del PIB). Un candidato natural aquí es el régimen de Tierra del Fuego, cuyos resultados en materia productiva han sido muy pobres.

- En lo que concierne al sistema científico y tecnológico, está claro que una prioridad de un futuro gobierno va a ser su reconstrucción y refinanciamiento. Sin embargo, esto no supone volver a la situación de 2023. Tal reconstrucción deberá incluir discutir las trabas –más allá de la inestabilidad macroeconómica– que han dificultado la innovación y cómo reducir la histórica desconexión y desconfianza mutua entre el sistema científico y el entramado empresarial. Ciencia y producción deben ser un solo corazón. Para ello, de mínima, será necesario revisar excesos de burocracia en el Conicet que han frenado la vinculación tecnológica, la cultura en ciertos ámbitos excesivamente científicista y antiempresarial, y el sistema de incentivos (que facilite y premie mucho más de lo que hace hoy la transferencia tecnológica a empresas).

- Por último, debe tenerse en cuenta que la capacidad de implementar ambiciosas políticas industriales no solo va a depender del financiamiento, sino de las capacidades estatales existentes y de la economía política de la cuestión. Mientras menos se invierta en desarrollar *expertise* técnica al interior del Estado, menor será el espacio de política para implementar políticas productivas finas y, por tanto, más sencillas deberán ser. A su vez, mientras más débil sea el gobierno futuro, menos margen tendrá para ser autónomo de los *lobbies* de actores que presionarán por mantener –o reponer– privilegios de distinto tipo (mercados regulados, protección, subsidios, etcétera).

2.3. Calidad del Estado

Idea fuerza: La reconstrucción del Estado después de Milei tendrá que poner la eficiencia del gasto en el centro

Cuando termine la era Milei, habrá un sinnúmero de demandas por parte de los grupos sociales desfavorecidos por sus políticas: sindicatos del sector público que van a pedir recuperar el salario y puestos de trabajos perdidos; jubilados que exigirán mejorar sus haberes; empresas que reclamarán subsidios y rebajas de impuestos para ganar competitividad; provincias que exigirán a la Nación fondos para obras... La lista es interminable.

La presión por subir el gasto público será muy intensa en el próximo gobierno progresista que conduzca la Argentina. Pero el margen para subirlo va a ser estrecho, producto de las severas restricciones fiscales que afronta el país y de que no podremos tener déficit fiscal por un buen tiempo hasta que recuperemos la credibilidad necesaria para poder financiarlo de manera sostenible.

La restricción para aumentar el gasto obliga a introducir en la agenda algo que ha sido muy esquivo a la tradición progresista argentina: cómo ser eficientes en el gasto público. Hasta ahora, la respuesta ha sido casi siempre gastar más, y rara vez cómo gastar mejor. No solo eso: la bandera de la modernización del Estado o de la eficiencia ha sido siempre mucho más cercana

a la derecha que al progresismo. Macri tuvo un Ministerio de Modernización del Estado que, a diferencia de lo que hoy busca Milei (desguazar el Estado) tenía algunos atisbos de generar un Estado más eficiente. El progresismo nunca se atrevió a hacer algo así. Resulta paradójico el ninguneo de esta agenda, siendo que el concepto de "gestión" (que muchos dirigentes políticos –tanto progresistas como no progresistas– incluyen en su vocabulario cotidiano) justamente alude implícitamente a la noción de eficiencia. Gestionar bien (mal) es lograr buenos (malos) resultados dados los recursos con que se cuenta.

¿Cómo es el gasto público argentino? Desde el punto de vista distributivo, podemos decir que tiene una doble cara. Por un lado, es un gasto que redistribuye mucho y baja la desigualdad como pocos otros países (cuadro 3). Pero lo hace por "mucho gasto" y no tanto por un sistema fiscal progresivo, lo que significa que se baja la desigualdad de una forma relativamente ineficiente (López del Valle *et al.*, 2021; Fernández Erlauer *et al.*, 2025). Para que se entienda mejor, basta un ejemplo. Bajar 1 punto el coeficiente de Gini puede costar más o menos dinero. Cada peso que gastamos en políticas como la Asignación Universal por Hijo o la moratoria previsional bajan mucho el Gini, dado que son muy progresivas (es decir, mejoran mucho más el ingreso de los más pobres que el de los más ricos) y propobres (el grueso del gasto se concentra en los deciles menos pudientes). En contraste, cada peso que gastamos en subsidios a la energía baja poco el Gini, dado que una parte muy importante de ese gasto va a sectores de mayores ingresos.

Cuadro 4. Coeficiente de Gini antes y después de la intervención fiscal, último dato disponible

País	Año	Gini de mercado	Gini final	Diferencia (p.p)
Sudáfrica	2014	0,74	0,55	- 0,19
España	2017	0,44	0,27	- 0,17
Argentina	2017	0,48	0,31	- 0,17
Estados Unidos	2016	0,48	0,33	- 0,15
Eswatini	2016	0,50	0,36	- 0,14

País	Año	Gini de mercado	Gini final	Diferencia (p.p)
México	2014	0,53	0,39	- 0,13
Namibia	2015	0,63	0,50	- 0,13
Panamá	2016	0,56	0,43	- 0,12
Polonia	2014	0,41	0,29	- 0,12
Turquía	2014	0,47	0,37	- 0,10
Colombia	2014	0,58	0,47	- 0,10
Kenia	2015	0,48	0,39	- 0,09
Ucrania	2016	0,31	0,22	- 0,09
Rusia	2010	0,38	0,30	- 0,08
Chile	2013	0,49	0,42	- 0,07
Rumania	2016	0,38	0,31	- 0,07
Bolivia	2015	0,46	0,39	- 0,07
Belarús	2015	0,29	0,23	- 0,07
India	2011	0,37	0,31	- 0,06
Albania	2015	0,37	0,32	- 0,05
Paraguay	2014	0,52	0,47	- 0,05
Egipto	2015	0,33	0,28	- 0,04
Tayikistán	2015	0,34	0,33	- 0,01
Costa de Marfil	2015	0,40	0,40	- 0,01

Nota: El Gini de mercado es antes de impuestos (tanto directos como indirectos) y el Gini final es después de transferencias y gasto en especie (como educación y salud pública).

Fuente: Elaboración propia en base a CEQ Data Center on Fiscal Redistribution vía Argendata.

En líneas generales, el sistema de cobro de impuestos y el gasto público son poco progresivos en la Argentina. Si bien nuestro país baja mucho el Gini antes y después de la intervención del Estado, lo hace de una forma poco eficiente, con muchas filtraciones hacia hogares de mayores ingresos. Dicho de otra manera, con una estructura tributaria y un gasto público más progresivos, podríamos bajar la desigualdad como lo hacemos ahora, con menos gasto y presionando menos sobre la macro. O, si se quiere, con el mismo nivel de gasto actual, podríamos estar bajando mucho más la desigualdad de lo que lo hacemos.

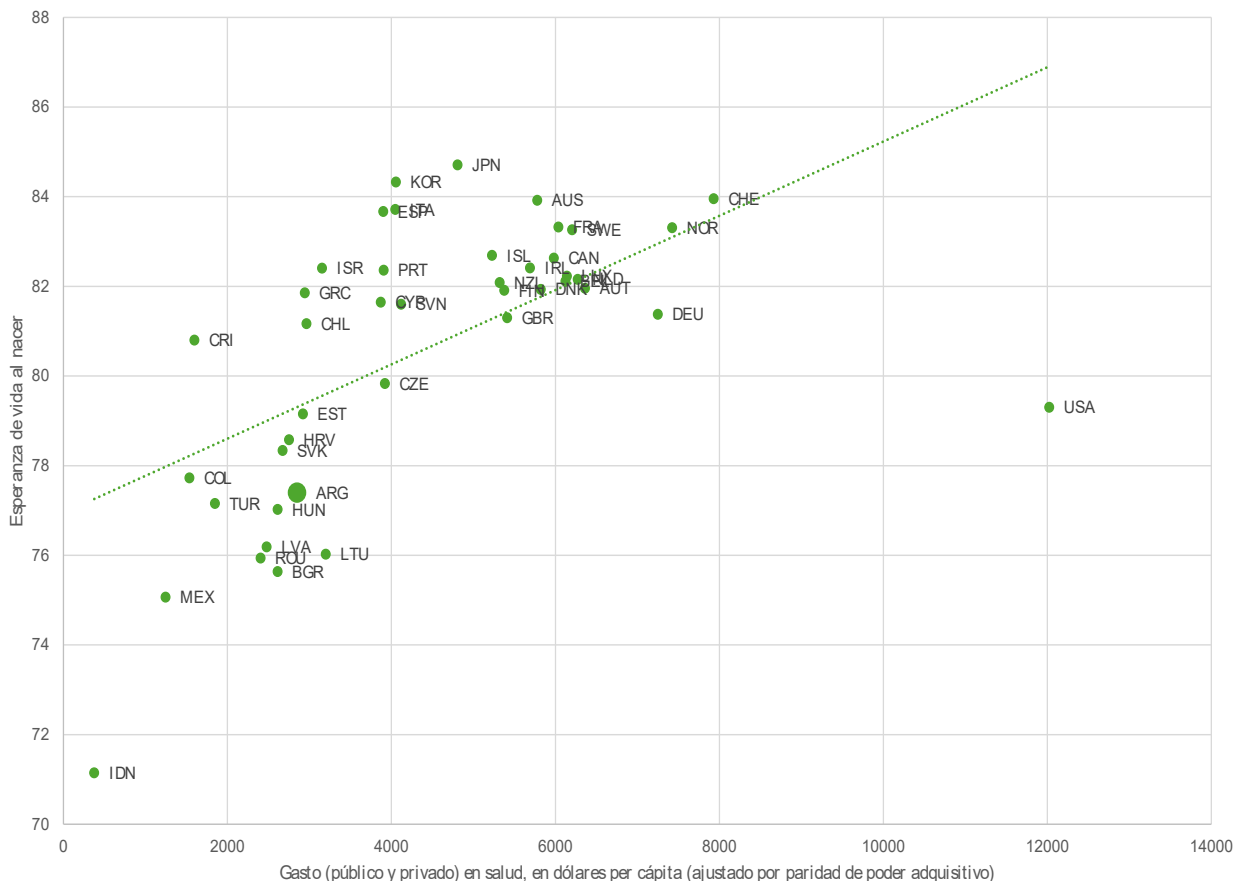
Sin embargo, la eficiencia del gasto va más allá de su dimensión distributiva. En general hay un común denominador en el Estado argentino: la relación entre el insumo y el producto es pobre. Somos el país de la región con mayor porcentaje de empleo público y sin embargo la calidad de los bienes públicos termina siendo peor que la de muchos de nuestros vecinos.

Veamos algunos ejemplos. Nuestro gasto en salud es de 2.850 dólares per cápita al año, casi idéntico al de Chile y cerca del doble que el de Costa Rica. Sin embargo, la esperanza de vida en la Argentina es de 77 años, inferior a la de

Chile y Costa Rica, donde ronda los 81 años. Como puede verse en el gráfico 6 (que muestra la correlación entre el gasto per cápita en salud y la esperanza de vida al nacer), la Argentina está por debajo de la recta de regresión, lo que indica que, dado lo que invierte en salud, tiene una

esperanza de vida menor a la que cabría esperar. En otros términos, del gráfico se desprende que la esperanza de vida en la Argentina, dado el nivel de gasto en salud, debería ser de 79 años en lugar de 77.

Gráfico 5. Gasto en salud y esperanza de vida al nacer (en años), 2023

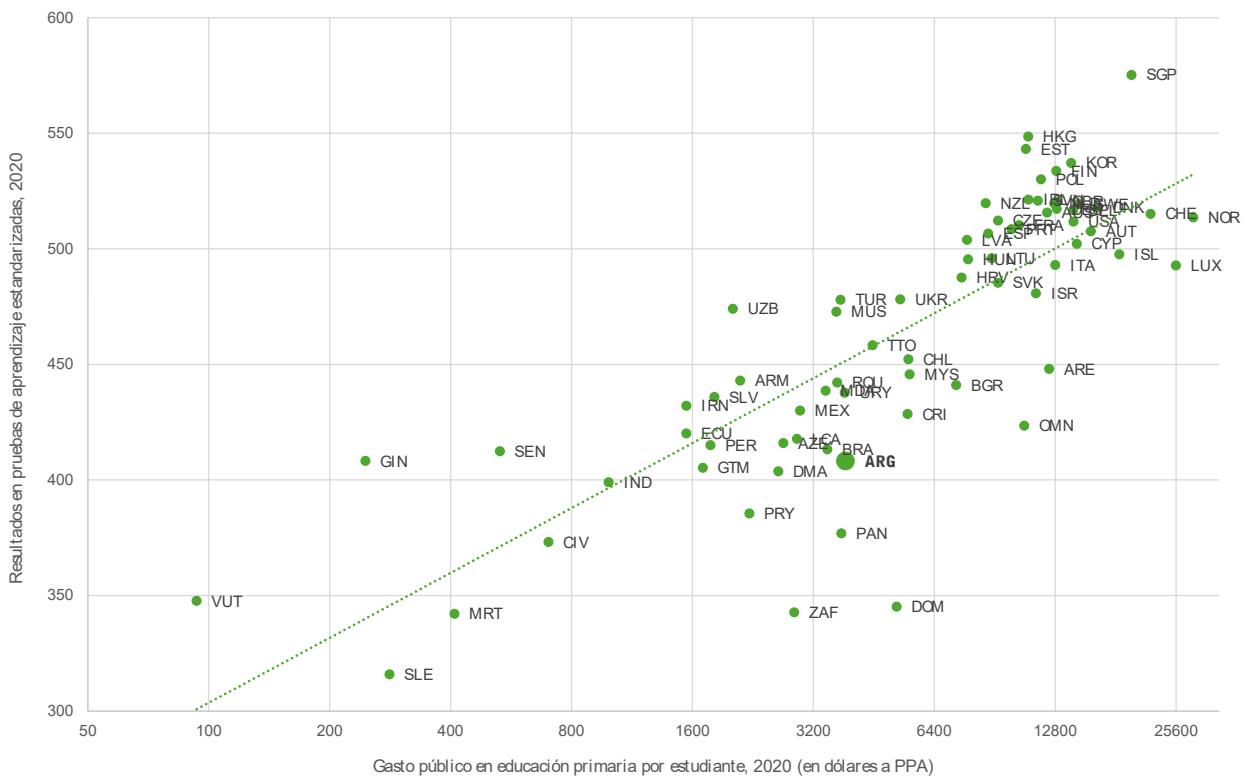


Fuente: Elaboración propia en base a Our World in Data. El gasto en salud incluye tanto el público como el privado, y está en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo (esto es, teniendo en cuenta las diferencias de costo de vida entre países).

Si observamos lo que ocurre con la educación, encontramos el mismo problema. Para el nivel de gasto público por alumno que tenemos, nuestros resultados en las pruebas estandarizadas educativas son malos. La Argentina invierte 3.862 dólares al año por estudiante de escuela primaria, cifra similar a la de Turquía y mayor

que la de México. Sin embargo, en las pruebas estandarizadas de aprendizaje, la Argentina saca 408 puntos, México 430 y Turquía 478. Como se ve en el gráfico 7, la Argentina nuevamente está por debajo de la recta de regresión, lo que indica que tenemos resultados peores a los esperables en función de lo que invertimos en educación.

Gráfico 6. Gasto en educación primaria por alumno y puntaje promedio en pruebas estandarizadas de aprendizaje, 2020

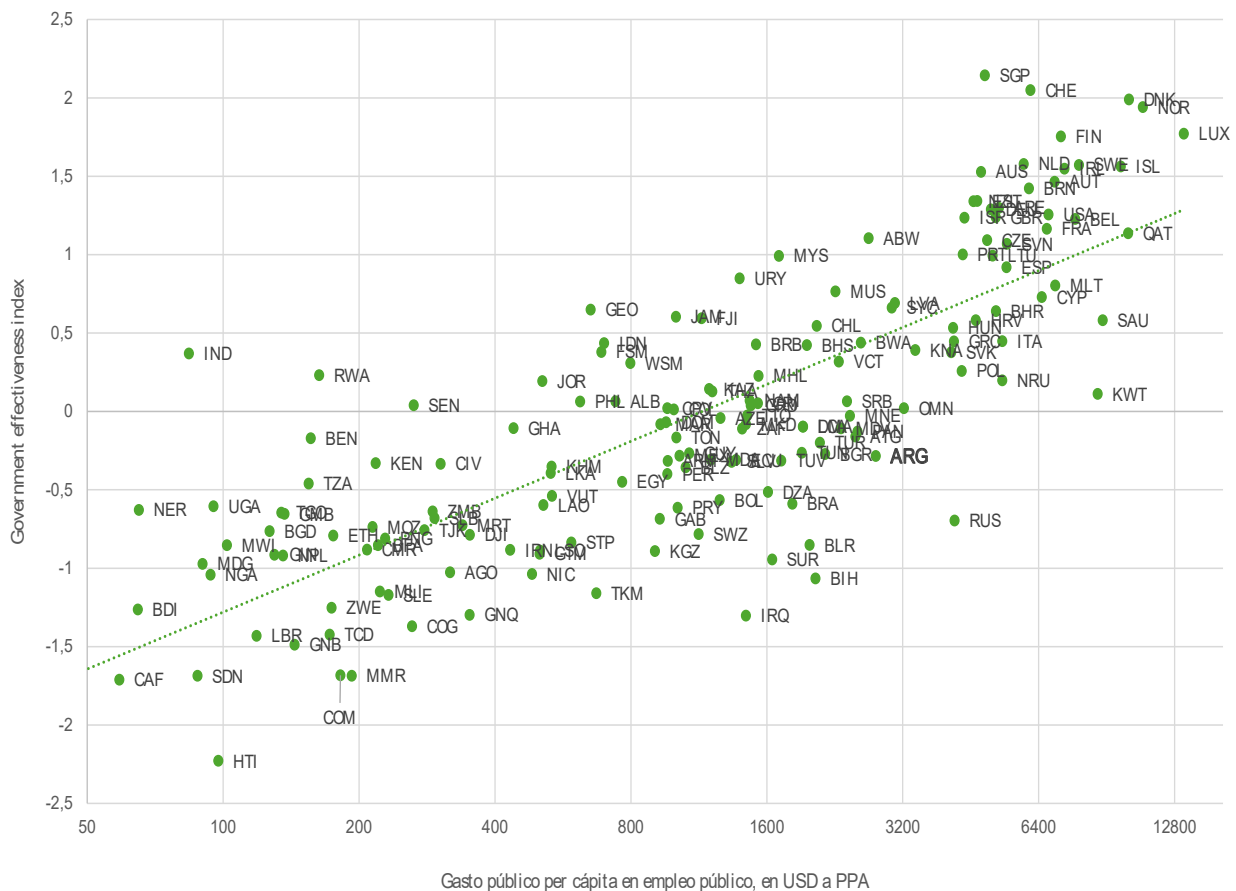


Fuente: Elaboración propia en base a Our World in Data. El gasto público en educación está en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo (esto es, teniendo en cuenta las diferencias de costo de vida entre países).

Una tercera forma de ver el mismo fenómeno es comparar el gasto público per cápita en masa salarial de empleados públicos y algún indicador de capacidades estatales, como el "Government Effectiveness" de los World Governance Indicators que arma el Banco Mundial. Este indicador mide la calidad con la que un Estado implementa sus políticas públicas, incluyendo la eficacia de la burocracia, la calidad de los servicios administrativos, la capacidad de coordinar acciones gubernamentales y el grado en que esas políticas se ejecutan sin trabas ni ineficiencias.

En el gráfico 8 se muestra la correlación entre el gasto público per cápita en empleados públicos y el puntaje de cada país en el indicador de efectividad gubernamental (que va de -2,5 a 2,5). Nuevamente se observa el mismo patrón: para el nivel de gasto que tiene la Argentina (2.787 dólares por habitante), el puntaje es malo, lo que se plasma en que la Argentina está por debajo de la recta de regresión. La Argentina tiene un *scoring* de -0,28, cuando debería tener cerca de 0,5, dado lo que invierte. En contraste, Chile y Uruguay gastan menos per cápita en empleados públicos en comparación con la Argentina, pero ambos se posicionan por encima de 0,5.

Gráfico 7. Gasto público per cápita en empleados públicos y efectividad gubernamental, 2022



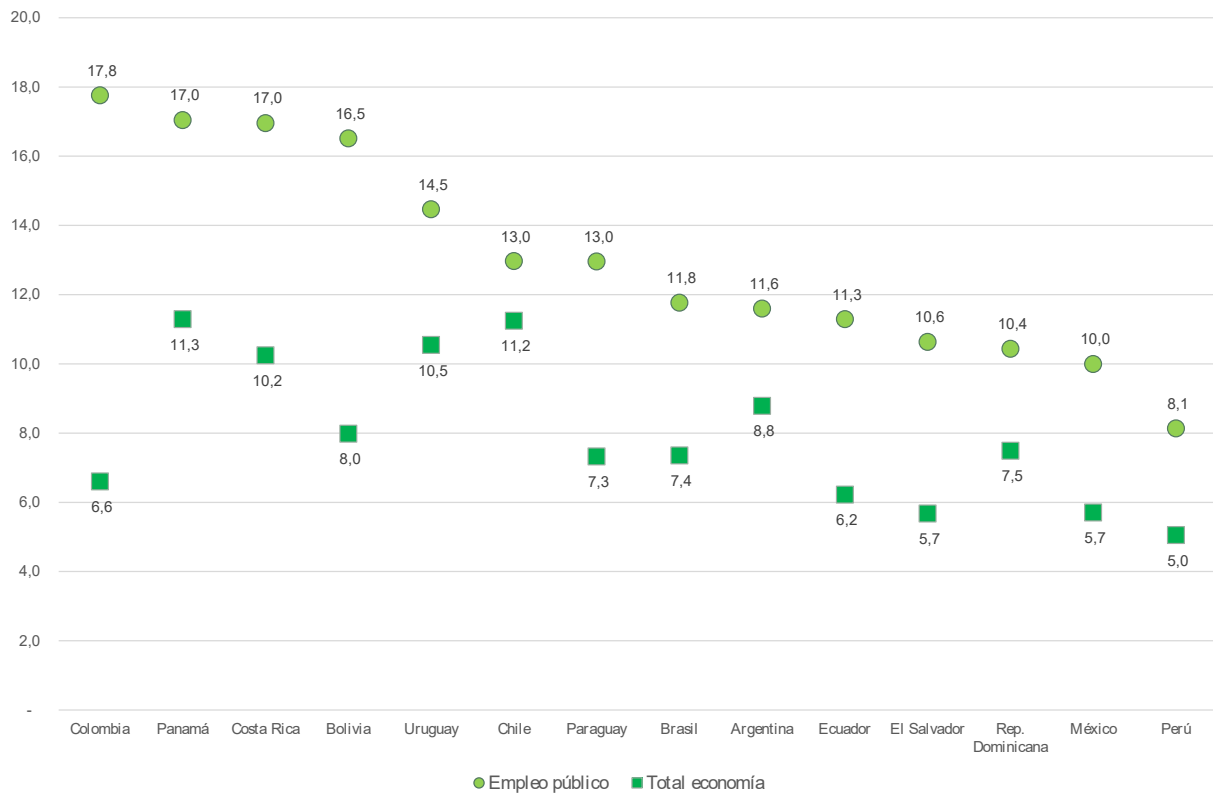
Fuente: Elaboración propia en base al Banco Mundial.

Cuando descomponemos el gasto público en empleo estatal, encontramos que la Argentina se caracteriza por tener mucho empleo público, pero mal pago. El 16,9% del empleo es público, la cifra más alta de toda América Latina, y cómodamente por encima de Uruguay (14,8%), Brasil (12,5%), México (13,7%) y Chile (9,1%)¹⁰. En contraste, los salarios de los empleados públicos son muy mediocres. En 2023, previo al fenomenal ajuste que introdujo el gobierno de Milei, eran de 11,6 dólares la hora (ajustado por paridad de poder adquisitivo), lo que nos ubicó en el puesto 9 sobre 14 países de la región (gráfico 9). Sin embargo, como muestra

el mismo gráfico, cuando se toma el conjunto de las actividades económicas, la Argentina mejora su posición y trepa al quinto lugar. Esto se debe a que el diferencial salarial positivo entre el sector público y el resto de las actividades económicas es mucho más bajo en nuestro país que en todo el resto de la región –con excepción de Chile–. En otros términos, en toda la región los trabajadores del sector público ganan más que la media (lo que se debe en parte a que es en promedio un empleo más calificado que la media y a un mayor nivel de sindicalización), pero en la Argentina ese diferencial es el segundo menor de la región.

10 Dato a 2020, tomado del Banco Mundial via Our World in Data. Disponible en <https://ourworldindata.org/grapher/public-sector-employment-as-a-share-of-total-employment>.

Gráfico 8 Ingreso laboral horario neto en empleados públicos y total de actividades económicas, circa 2023



Fuente: Elaboración propia en base al CEDLAS y el Banco Mundial. Los datos son a 2022 para Chile y México, para 2023 para Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador y Panamá, y a 2024 para el resto.

Es posible que este menor diferencial salarial del sector público sobre el privado opere como un mecanismo de selección adversa. Los sueldos en el sector público son poco atractivos para atraer talento, lo que debilita la formación de capacidades estatales. En contraste, el Estado es un gran empleador para muchas personas de nivel de calificación intermedio o bajo, que en el sector privado seguramente tendrían peores sueldos, dado el nivel de calificación. De este modo, el Estado argentino, al caracterizarse por mucho empleo mal pago, termina siendo un esquema de redistribución del ingreso hacia trabajadores menos calificados, pero limitando la posibilidad de construir capacidades estatales que se correspondan con el nivel de gasto total en empleados públicos.

Por último, otro capítulo importante dentro de la discusión sobre la eficiencia del gasto es el

sistema previsional. La Argentina se caracteriza por tener un sistema previsional que especialistas como Rafael Rofman (2025) consideran “caro, injusto e ineficiente”.

Por un lado, es caro porque el país gasta cerca del 10% de su PIB en el sistema previsional, valor similar a países con poblaciones mucho más envejecidas como Suecia y Bélgica, y cerca del doble que Chile o Costa Rica, que tienen demografías más parecidas. El alto gasto previsional no se debe a jubilaciones medias altas (de hecho, son muy modestas) sino a la coexistencia de: a) 2,8 millones de beneficiarios menores de 65 años, b) 1,1 millones de personas con doble beneficio (jubilación y pensión) y c) más de 200 regímenes especiales, con edades más tempranas de jubilación y/o fórmulas de movilidad mucho más generosas que el resto.

A la vez, el sistema previsional es injusto, ya que trata de forma desigual a personas con trayectorias laborales muy similares. El quiebre arbitrario en 30 años de aportes define condiciones de jubilación muy disímiles entre una persona con 29 años de aportes (con prestaciones muy inferiores) a una que tiene 30, a pesar de que la trayectoria haya sido casi la misma. Y también el sistema es ineficiente, ya que gasta más de lo necesario para proteger a los adultos mayores.

Dado este diagnóstico crítico, es menester y urgente tener una agenda progresista de eficiencia del gasto y construcción de capacidades estatales. Algunas ideas en esta dirección son:

- No volver a implantar un esquema de subsidios a los servicios públicos, como se hizo en los años del kirchnerismo, que terminaron siendo muy ineficientes desde el punto de vista redistributivo (muy costosos en términos presupuestarios, con impactos modestos en términos de mejora del Gini).
- Rediscutir la viabilidad de empresas públicas que actualmente tienen mínima producción y puro déficit. En la Argentina hay casos claros que una agenda progresista debe afrontar: Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) –a nivel nacional– y Astilleros Río Santiago (ARS) –en la provincia de Buenos Aires– son dos ejemplos de lo que no debe hacerse con las empresas públicas: producir casi cero y seguir pagando salarios como si no pasara nada. Como caso contrario, hay varios ejemplos de éxito y eficiencia en empresas públicas, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) e Investigación Aplicada (INVAP), que deberían ser la norma. En un punto medio podemos poner a Aerolíneas Argentinas, que desde su estatización en 2008 mejoró su puntualidad y servicio, aunque sin lograr reducir sustentablemente su déficit bajo gobiernos progresistas.
- Generar un esquema de incentivos para reducir la nómina de empleados públicos (retiros voluntarios, incentivos para su migración hacia el sector privado en los trabajadores de menor calificación), pero ganando espacio para pagar mejor, construir mecanismos de carrera y profesionalizar más la gestión pública.
- Promover una acelerada adopción de inteligencia artificial dentro del Estado, para mejorar la productividad del sector público, acercar al Estado a la ciudadanía y reducir tiempos burocráticos.
- Estimular un mayor intercambio de datos entre dependencias estatales para focalizar mejor las políticas públicas, con los resguardos de seguridad correspondientes. En la misma línea, cualquier política pública (por ejemplo, un subsidio o transferencia, sea a una persona o a una empresa) debe incluir un requisito de información que luego pueda servir para delinear mejor la política pública. A modo de ejemplo, durante la pandemia el Estado subestimó por mucho la cantidad de beneficiarios teóricos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por no tener información suficiente sobre la composición de los hogares en el segmento informal, y no hizo los esfuerzos suficientes para pedir información luego de implementada la primera ronda de la medida. Esto imposibilitó tener un mapeo más claro del universo de la informalidad, debilitando la posibilidad de hacer políticas segmentadas a futuro.
- En materia previsional, rediscutir una reforma consensuada y progresista, en la que se unifique el sistema para terminar con los más de 200 regímenes especiales, se ordene el acceso a beneficios para evitar dobles coberturas injustificadas y se establezca una transición que elimine el salto arbitrario entre quienes tienen 29 y 30 años de aportes. Para evitar comprometer

derechos y adquiridos, la eliminación de los regímenes especiales debería hacerse para los futuros empleados beneficiarios. De acuerdo a estimaciones de Rofman *et al.* (2025), esta serie de reformas permitiría que el 61% de los futuros beneficiarios mejore sus haberes, con un ahorro a largo plazo equivalente al 0,8% del PIB.

- Evitar regular por regular. Existe una tentación a la “regulomanía” en el progresismo. En el mejor de los casos, sobreestimamos a menudo el poder de las capacidades estatales para regular, y muchas veces terminamos creando regulaciones que generan más daño que beneficios. En el peor de los casos, muchas veces terminamos siendo permeables a lobbies que piden una regulación para obtener un privilegio. El Estado debe ayudar a facilitar la vida de las personas, no ser una traba. La gestión actual de Federico Sturzenegger dentro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado sin dudas tiene una mirada dogmática y destructiva del Estado en muchos aspectos, pero también expone –como no se hizo en mucho tiempo– el daño que generan una enorme cantidad de regulaciones, algunas de ellas directamente insólitas¹¹. Incluso, en su método aparece un componente participativo que un gobierno democrático y progresista debería considerar: un canal abierto para que cualquier ciudadano denuncie regulaciones burocráticas que entorpecen la vida económica. Esto no implica derogar una norma solo porque alguien la cuestione, pero sí ofrece un canal ágil para detectar cómo determinadas regulaciones impactan en la vida cotidiana y en la actividad productiva.

En resumidas cuentas, es necesario que la

agenda de la modernización del Estado y la de la eficiencia no sean exclusivas de la derecha.

- En términos del recientemente electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani:

Como un apasionado de los bienes públicos, creo que en la izquierda tenemos que ser igual de apasionados sobre la excelencia pública [...], cómo podemos hacer efectivas las ideas que nos apasionan. Cualquier caso de ineficiencia pública es una oportunidad para un argumento en contra de la existencia del sector público.

Es frustrante que hayamos permitido que el lenguaje en torno a la burocracia, la eficiencia y el despilfarro se perciba como una preocupación de la derecha. Es la principal preocupación de la izquierda, porque representa la realización o la traición de aquello que motiva gran parte de nuestra política¹².

3. Consideraciones finales: hacia una nueva narrativa progresista

El progresismo argentino llegó a un punto límite: o se reinventa o queda fuera del poder por mucho tiempo. Durante años defendimos mantras que fueron en parte responsables del profundo deterioro económico y social que viene experimentando la Argentina en la última década y media. No solo eso, nos negamos a dar discusiones incómodas y terminamos defendiendo un *statu quo* que se volvió cada vez más insoportable para el ciudadano común. No quisimos, no supimos o no pudimos reconocer los estragos que causa la inflación. No nos animamos a plantear que no siempre “el Estado presente te salva”, que no siempre más gasto asegura derechos en la práctica, que no siempre proteger la industria nacional redunde en una

11 Un ejemplo es el de la exigencia de exportar sandías envasadas o en rejilla –aun cuando el cliente no lo pedía–, una regla absurda que encarecía el proceso y terminaba funcionando como una traba innecesaria para quienes querían exportar.

12 Citado en Schargrodsky, 2025.

mejora del bienestar colectivo. No supimos o no quisimos ver que la Argentina fue siendo superada por cada vez más países de la región, a los que históricamente aventajábamos. Creímos ser “el mejor país del mundo”, como oposición al cipayismo de la derecha de creer que “somos un país de mierda”, y fuimos incapaces de reconocer que muchas cosas estaban mal.

Una idea que generó mucho daño dentro del progresismo, sobre todo en los espacios nacional-populares, es lo que podríamos llamar el “síndrome de la excepcionalidad criolla”, esto es, la idea por medio de la cual creemos que la Argentina es un país totalmente diferente a los demás, donde “mueren las teorías”. Esta visión –popularizada por aquella frase irónica que distinguía entre países desarrollados, no desarrollados, Japón y la Argentina, y retomada varias veces por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner– supone que siempre tenemos que estar inventando la pólvora y que nada de lo que hacen otros países sirve como guía para nosotros.

“Tenemos inflación porque tenemos conflicto distributivo gracias a una sociedad con pulsión igualitarista” o “porque tenemos sindicatos”. Uruguay también los tiene y lo logró controlar. “Tenemos una tendencia dolarizadora en nuestro ADN”. Muchos otros países de la región tuvieron momentos de alta inflación y fuga de capitales, y lo resolvieron con el correr del tiempo y buenas políticas.

El síndrome de la excepcionalidad criolla debe ser revisado a fondo, porque sin esa revisión seguiremos evitando algo esencial: que el causal profundo de nuestro pésimo desempeño económico en los últimos 14 años fueron políticas equivocadas. El provincianismo de ideas, especialmente en economía, es algo que debemos superar de una vez por todas. Necesitamos recuperar algo que Néstor Kirchner mencionó en su discurso de asunción de 2003: ser un país normal. Y ser normales implica abandonar la excepcionalidad permanente y volver a aprender del mundo y la región.

A lo largo de estas páginas nos focalizamos en tres ideas fuerza para un progresismo renovado.

Primero, debemos abrazar la estabilidad macroeconómica como un valor central para la justicia social, no como una mera “concesión a la ortodoxia”. Segundo, partiendo de la idea de que la estructura productiva importa –y mucho–, y a partir de la enorme vacancia que deja Milei en este campo, debemos proponer un futuro productivo para la Argentina, moderno en lugar de anacrónico, que reconozca los peligros de la intervención estatal contraproducente y del proteccionismo infinito. Tercero, debemos asumir que la eficiencia del Estado no es un eslogan tecnocrático, sino el corazón de cualquier proyecto democrático que aspire a mejorar la vida de las mayorías. El progresismo que no se anima a hablar de eficiencia estatal está destinado a regalar la bandera a la derecha, como durante mucho tiempo ocurrió con la seguridad. Aquí también Milei deja una vacancia, ya que él quiere “destruir el Estado por dentro” y nosotros queremos construir uno en línea con los tiempos que corren: ágil, eficaz, transparente y capaz de convertir cada peso gastado en bienestar tangible.

Además de estas tres ideas fuerza trabajadas en las páginas anteriores, hay otros campos en donde el progresismo puede construir una agenda moderna. Uno de ellas es el del bienestar subjetivo, corroído por el debilitamiento de los vínculos comunitarios fruto del auge de las nuevas tecnologías, y el empujón hacia el individualismo y la soledad que generó la pandemia, del cual nunca nos terminamos de recuperar.

Repensar el bienestar hoy implica algo más que crecimiento económico, ingresos y empleo: supone cuidar la salud mental, reconstruir espacios de encuentro, promover ciudades integradas que favorezcan la convivencia y recuperar el valor de los lazos sociales como fuentes primarias de felicidad. Algo todavía poco conocido al interior del progresismo es la enorme evidencia que muestra cómo los lazos sociales fuertes tienen impactos notables en el bienestar subjetivo (Ortiz-Ospina y Roser, 2017; Schteingart y Trombetta, 2018).

Esta agenda permite también pasar a la ofensiva y salir de la pura autocrítica en lo que hicimos en materia económica, productiva y estatal.

Permite hablar a la ciudadanía de temas de su vida cotidiana y proponer nuevos espacios de discusión política: cómo diseñamos ciudades que fomenten la vida en común en vez del aislamiento; cómo promovemos la salud mental como política pública y no como responsabilidad individual; cómo fortalecemos los vínculos comunitarios que sostienen a las familias, a los barrios y a las personas cuando el mercado no alcanza y el Estado no llega. Esta es una agenda profundamente progresista, pero también profundamente contemporánea: habla de calidad de vida, de bienestar emocional, de tiempo, de vínculos, de lo más profundo de la vida cotidiana. Es una agenda que Milei desprecia o ni siquiera percibe. Justamente por eso, es una vacancia gigantesca que el progresismo puede —y debe— ocupar.

En definitiva, la tarea es doble: reparar lo que rompimos y construir lo que falta. Recuperar y ser creíbles en la bandera de la estabilidad económica, modernizar la mirada productiva y profesionalizar el Estado son condiciones necesarias, pero no suficientes. La reconstrucción progresista del siglo XXI también exige volver a hablar de sentido, comunidad, bienestar y futuro; volver a ofrecer un horizonte compartido que dé ganas de ser habitado. Si el progresismo quiere volver a enamorar, tiene que volver a hacer política sobre las cosas que realmente le importan a la gente: vivir sin miedo a la inflación, trabajar en sectores con futuro, confiar en un Estado que funciona y sentirse acompañado en un país menos hostil. Un progresismo renovado no promete volver al pasado, sino abrir una puerta creíble hacia un país más normal, más moderno y, sobre todo, más humano. Ese es el desafío.

Bibliografía

- Allan, T.; Corfield, K.; O'Farrell, J. y Freytes, C. (2024). Discutir los derechos de exportación: hacia un nuevo marco fiscal para el agro. Fundar. Disponible en <https://fund.ar/publicacion/discutir-los-derechos-de-exportacion-hacia-un-nuevo-marco-fiscal-para-el-agro/>.
- Argentina Productiva 2030 (2023). Documento Integrador. Ministerio de Economía.
- Bisang, R., Carciofi, R., Piñeiro, M. y Tejada Rodríguez, A. (2022). *Agroindustria: transformaciones recientes y su papel en el desarrollo argentino*. Buenos Aires: Teseo.
- Gerchunoff, P. y Rapetti, M. (2023). No bombardeen todo. *Revista Panamá*.
- Fernández Erlauer, M.; Villafañe, M.F. y Schteingart, D. (2025). Gasto público. Argendata. Fundar. Disponible en <https://argendata.fund.ar/topico/gasto-publico/>.
- Hallak, J.C.; Bril Mascarenhas, T.; Pezzarini, L.; Bentivegna, B. y Park, L. (2023). Diagnóstico del Régimen de Tierra del Fuego. Fundar. Disponible en https://fund.ar/wp-content/uploads/2023/06/Fundar_DOC1_Diagnostico_TDF.pdf.
- Hidalgo, C.A. y Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the national academy of sciences*, 106(26), 10570-10575.
- Isaak P. y O'Farrell J. (2025). Ciencia y tecnología. Argendata. Fundar. Disponible en <https://argendata.fund.ar/topico/ciencia-y-tecnologia/>.
- Juhász, R.; Lane, N. y Rodrik, D. (2023). The new economics of industrial policy. *Annual Review of Economics*, 16.
- Lódola, A.; Moskovits, C. y Zack, G. (2024). Hacia un sistema tributario federal armónico: diagnóstico y propuestas. Fundar. Disponible en https://fund.ar/wp-content/uploads/2024/02/Fundar_Hacia-un-sistema-tributario-federal-

[armonico_CC-BY-NC-ND-4.0.pdf](#)

López del Valle, J.C.; Brest López, C.; Campabadal, J.; Ladronis, J.; Lustig, N.; Martínez Pabón, V. y Tommasi, M. (2021). Fiscal policy, income redistribution and poverty reduction in Argentina. (CEQ Working Paper N° 111). CEQ Institute, Tulane University.

Mazzucato, M. (2021). *Misión economía*. Taurus.

Ortiz-Ospina, E. y Roser, M. (2017). Happiness and Life Satisfaction, Our World in Data.

Rodrik, D. y Stiglitz, J.E. (2025). A new growth strategy for developing nations. In *The New Global Economic Order* (pp. 89-107). Routledge.

Rofman, R. (2025). La oportunidad de una reforma previsional integral en Argentina, CIPPEC.

Rofman, R.; Apella, I.; Mera, M.; López Méndez, E. y Arakaki, A. (2025): "Midiendo el impacto de una reforma integral del sistema previsional en Argentina", Documento de políticas públicas #250, CIPPEC, septiembre.

Schragrotsky, I. (2025). El peronismo y los debates sobre su futuro, Cenital.

Schteingart, D. (2017). Especialización productiva, capacidades tecnológicas y desarrollo económico: trayectorias nacionales comparadas y análisis del caso noruego desde mediados del siglo XX, Tesis de doctorado en Sociología, IDAES-UNSAM.

Schteingart, D.; Tavosnanska, A.; Isaak, P.; Antonietta, J. M. y Ginsberg, M. (2024a). Luces y sombras de la política industrial en Argentina en el siglo XXI. Fundar. Disponible en https://fund.ar/wp-content/uploads/2024/11/Fundar_Doc2_Luces-y-sombras-de-la-politica-industrial-Argentina-en-el-siglo-XXI_CC-BY-NC-ND-4.0.pdf.

Schteingart, D.; Tavosnanska, A.; Isaak, P.; Antonietta, J. M. y Ginsberg, M. (2024b). El renacimiento de la política industrial en el mundo. Fundar. Disponible en https://fund.ar/wp-content/uploads/2024/11/Fundar_Doc1_El-renacimiento-de-la-politica-industrial-en-el-mundo_CC-BY-NC-ND-4.0-1.pdf.

Schteingart, D.; Ludmer, G. y Schuffer, N. (2024c). Plan de acción para la sustentabilidad de la industria textil-indumentaria argentina. Fundar. Disponible en <https://fund.ar/publicacion/plan-de-accion-para-la-industria-textil-indumentaria/>.

Schteingart, D.; Ludmer, G. y Schuffer, N. (2024d). Los precios de la ropa en Argentina. Fundar. Disponible en <https://fund.ar/publicacion/los-precios-de-la-ropa-en-la-argentina/>.

Schteingart, D.; Tavosnanska, A.; Isaak, P.; Antonietta, J.M. y Ginsberg, M. (2024e). Una política industrial para el futuro de Argentina. Fundar. https://fund.ar/wp-content/uploads/2024/11/Fundar_Doc3_Una-politica-industrial-para-el-futuro-de-Argentina_CC-BY-NC-ND-4.0.pdf.

Schteingart, D. y Sidicaro, N. (2025). Industria. Argendata. Fundar. Disponible en <https://argendata.fund.ar/topico/industria/>.

Schteingart, D. y Trombetta, M. (2018). La relación entre desarrollo, lazos sociales y bienestar subjetivo, *Cuadernos del CIMBAGE*, N° 20.

Telechea, J.M. (2023). *¡Inflación! ¿Por qué Argentina no se la puede sacar de encima?* Capital Intelectual.

Publica Fundación Heinrich Böll Buenos Aires

info@boell.org.ar

Marzo 2026

Distribución gratuita

Licence: Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>



La Fundación Heinrich Böll es la fundación política alemana cercana al partido Alianza90/Los Verdes. Tiene su sede central en Berlín y actualmente cuenta con 34 oficinas en todo el mundo. La Fundación y su oficina en Buenos Aires se sienten especialmente comprometidas con las políticas para una transición social-ecológica y un desarrollo sustentable, la promoción de la democracia y la justicia de género, así como con la consolidación institucional y profundización de los derechos humanos. Asimismo, considera clave fortalecer a la sociedad civil en el dialogo permanente entre ciudadanía e institucionalidad política como práctica democratizadora. Hacen especial hincapié en el intercambio de conocimientos y la comprensión mutua entre actores en Europa y América Latina, para lo cual promueven el diálogo internacional.